

ANTECEDENTES

El 16 abril de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) anunciaron en conferencia de prensa oficial el caso “La Línea”. Las órdenes de captura incluyeron a funcionarios del gobierno de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, y otras personas asociadas a una red de defraudación aduanera (Galicia, 2018). La investigación reveló que la misma vicepresidenta estaba implicada. Este anuncio desencadenó una serie de protestas ciudadanas que exigían, frente al Palacio Nacional de la Cultura, la renuncia de funcionarios públicos implicados en casos de corrupción.

El 8 de mayo la vicepresidenta Baldetti renunció. El 20, el MP y la CICIG hicieron público un segundo caso de corrupción, esta vez ligado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Aparecían implicados los miembros de su Junta Directiva, que incluía a un representante del Comité Coordinador

de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) (García, 2018).

Las investigaciones continuaron, también las protestas. El 21 de agosto, en conferencia de prensa, el MP y la CICIG situaron al presidente Otto Pérez Molina como cabecilla de la estructura junto con Roxana Baldetti. Diversos sectores del país, incluidas asociaciones de estudiantes universitarios, campesinos, y otras organizaciones de la sociedad civil convocaron a un paro nacional para el 27 de agosto, con el fin de exigir la renuncia del presidente. Pérez Molina dimitió cinco días después. A este paro no se sumó oficialmente el sector privado organizado.

Para muchas personas, los eventos de ese año representaron un primer paso hacia una Guatemala con otras reglas de juego, en la que la impunidad y la falta de justicia parecían estar finalmente desapareciendo. Ante la renuncia de Pérez Molina, se designó un gobierno de transición liderado por Alejandro Maldonado Aguirre.

Todo esto ocurrió durante la campaña electoral 2015, en la que Manuel Baldizón, del partido Lider, figuraba como el más probable ganador. Las protestas se mezclaron con la campaña mediática “No te toca”, que circulaba en redes sociales desde marzo del mismo año y hacía referencia a la creencia guatemalteca de que candidatos que se han postulado y perdido varias veces avanzan en popularidad hasta que “les toca” ganar. La campaña #NoTeToca tuvo éxito y Baldizón no pasó a segunda vuelta. La contienda entre Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN Nación), y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dio como ganador al primero.

Las protestas y otras formas de manifestación ciudadana confirmaron que los ciudadanos, en general, desconfiaban de las autoridades y de la capacidad de los organismos del Estado para combatir la corrupción. Este sentimiento generalizado unió a diferentes sectores y también dio vida a nuevas formas de coordinación estudiantil y nuevos liderazgos. Es importante contrastar esta novedad de los nuevos liderazgos que se cristalizaron durante las protestas que culminaron en el paro del 27 de agosto de 2015 con la oferta electoral disponible ese año, pues los partidos y candidatos que pasaron a segunda vuelta no eran asociados con las aspiraciones manifestadas en la plaza.

Las investigaciones del MP y CICIG continuaron. Las conferencias de prensa para anunciar avances se conocieron popularmente como “jueves de CICIG”. Conforme avanzaron los distintos casos, se hizo evidente que las conexiones en casos de corrupción iban más allá de funcionarios públicos y tocaban entidades e individuos del sector privado.

Estas revelaciones generaron posturas a favor y en contra de la comisión, que fueron consolidándose conforme la evidencia se hizo pública. El entonces embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, se convirtió en una de las más sonoras voces a favor de la lucha contra la impunidad, transmitiendo un mensaje de apoyo de parte de la administración de Barack Obama.

El apoyo de “la embajada”, como coloquialmente se identifica a la embajada de Estados Unidos, generó una sensación de seguridad entre sectores que también apoyaban la lucha contra la corrupción y las acciones del MP y CICIG. Entre los grupos que se sintieron

respaldados por la postura del gobierno de Estados Unidos había algunos empresarios agremiados y otros que, aunque no pertenecieran a cámaras, representaban un nuevo perfil de empresario grande públicamente alineado con temas que históricamente se habían asociado casi exclusivamente a la sociedad civil organizada. El 2015 también hizo evidente que existían voces en los medios de comunicación privados haciendo contrapeso a la postura de la televisión abierta, siempre alineada con los intereses del gobierno de turno y el *statu quo*. Los medios de comunicación comenzaron a ser catalogados como “pro” o “antiCICIG”.

La elección del presidente Jimmy Morales representó un giro en el desarrollo de los eventos relacionados con la lucha contra la corrupción. El nombramiento en puestos de gabinete de personas afines a la lucha generó esperanza en los sectores que esperaban que la nueva administración continuara alineada con las investigaciones. En abril de 2016, el presidente Morales solicitó a las Naciones Unidas extender el mandato de la CICIG hasta 2019 (Álvarez, 2016). En septiembre de 2016 el hijo y el hermano del presidente Morales aparecieron implicados en un caso bajo investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). Este evento marca el fin de las relaciones amistosas entre el presidente Morales y la CICIG y el MP. El domingo 27 de agosto de 2017, el presidente Morales, por medio de un anuncio grabado en vídeo (Prensa Libre, 2017), declaraba *persona non grata* al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, exigiendo que abandonara el país inmediatamente, acusándolo de liderar la “injerencia extranjera” (Ramos, 2018).

Este anuncio provocó un segundo paro nacional en protesta contra la postura del presidente. En esta

ocasión, el sector privado organizado también optó por no participar. La Corte de Constitucionalidad anuló la orden de expulsión, permitiendo que el comisionado permaneciera en el país. Para entonces, sin embargo, la polarización de las posturas a favor y en contra del trabajo de la CICIG y el MP se hacía cada vez más tangible. También se hizo evidente que la opinión se dividía más y más entre quienes eran “proCICIG-proIván”, “proCICIG-antiIván” y “antiCICIG-antiIván”. Esta se reflejó en el tipo de cobertura mediática que se le daba a la protesta ciudadana y en el aumento de confrontaciones en redes sociales.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en noviembre de 2017, constituyeron otro hito que impactó el trabajo de la CICIG y el MP. El triunfo de Donald Trump, del Partido Republicano, generó optimismo entre los sectores de la sociedad guatemalteca que consideraban que el gobierno de Estados Unidos, su aliado histórico, se había volcado contra ellos. Conforme avanzaron los meses tras el ascenso de Trump, se comprobó que el apoyo al trabajo de CICIG de parte del Congreso y Senado estadounidenses ya no era tan homogéneo como durante la administración de Obama. La salida del embajador Todd Robinson, ese mismo septiembre, contribuyó a la percepción social de que la balanza comenzaba a inclinarse en contra de los sectores que se habían mantenido firmemente a favor del trabajo de la CICIG y el MP.

Los primeros meses de 2018 vieron la destitución de funcionarios públicos como Juan Francisco Solórzano Foppa (Paredes, 2018) y Francisco Rivas (Paredes y Ríos, 2018), superintendente de administración tributaria y ministro de Gobernación, respectivamente, quienes, junto con viceministros y otros cargos aso-

ciados eran considerados aliados en la lucha contra la corrupción y afines a la embajada de los Estados Unidos. Los cambios siguientes en el Ejecutivo, así como el aumento en el número de voces que, desde la Presidencia, el Congreso de la República, y el sector privado organizado, marcaron el cambio final en la tendencia que inició en abril del 2015. En septiembre de 2019, doce años después de su llegada, terminó el mandato de la CICIG en Guatemala.

Este estudio cualitativo busca ilustrar la experiencia y la visión de miembros del sector privado y de medios de comunicación respecto al período histórico vivido del año 2015 hasta septiembre 2019. Los hitos de esos cuatro años provocaron un cambio de las dinámicas en, y entre, el sector privado organizado, la sociedad civil y los medios de comunicación.

Haberse posicionado abiertamente respecto al trabajo de la CICIG y del MP representó un costo importante para muchas de las personas que propusieron una visión alternativa al *statu quo*. En algunos casos, su “cancelación” en espacios de toma de decisión y participación empresarial y periodística fueron casi totales.

La investigación se enfocó en personas que llegaron a ser identificadas como emblemáticas de este proceso, así como en personas del sector privado o cercano a él que vivieron los eventos desde espacios coyunturales, con acceso a opiniones diferentes e información específica sobre las diversas dinámicas que se desencadenaron en la élite empresarial y los medios de comunicación privados.

También incluye la visión de algunos empresarios cuya percepción del trabajo de la CICIG y del MP cambió conforme avanzaron los procesos y se anunciaron